



## **MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS, LA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO, LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y OTROS ASPECTOS REFERIDOS AL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “SERVICIO MÓVIL DE ATENCIÓN SANITARIA A DROGODEPENDIENTES Y DERIVACIÓN A TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.**

### **INSUFICIENCIA DE MEDIOS**

El contrato tiene como fin dar continuidad ininterrumpida al de referencia C.A. 7/2018: “Servicio Móvil de Adicciones”. (Referencia Nexus: A/SER-009618/2019), que finaliza el próximo 15 de junio de 2025 sin posibilidad de prórroga,

El objeto del contrato es la prestación de asistencia sanitaria, mediante dispositivos móviles en los espacios marginales de venta al menudeo, a personas adictas a sustancias para minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo, así como el fomento de las derivaciones de esta población a los recursos de la Red Asistencial de Adicciones de la Comunidad de Madrid con el propósito de realizar un tratamiento de deshabituación

También formará parte del objeto del contrato el tratamiento a los pacientes con un trastorno persistente y en situación de alta marginalidad que residen en las 55 plazas de apoyo residencial a la adherencia al tratamiento, de las que dispone la Consejería de Sanidad

La amplitud y las especiales características del objeto del contrato, reflejado todo ello en el pliego de prescripciones técnicas, impide que la prestación del servicio pueda ser ejecutada con personal propio. Por otro lado, tampoco se dispone de material y equipamiento suficiente para dar cobertura a los trabajos cuya contratación se pretende. En consecuencia, cabe concluir que el Servicio Madrileño de Salud no puede prestar con medios propios este servicio y debe recurrir a su contratación pública, conforme con las exigencias establecidos en los artículos 28.1 y 116.4 f) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

### **ELECCION DEL PROCEDIMIENTO**

Con objeto de garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y una eficiente utilización de los fondos públicos, la licitación y adjudicación del contrato se realizará a través de un procedimiento abierto con pluralidad de criterios, que es el que la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 131.2, establece como procedimiento ordinario.

Por un lado, el procedimiento abierto es el que proporciona mayores niveles de publicidad y transparencia, que garantizan la no discriminación e igualdad de trato, y por otro, la utilización de una pluralidad de criterios permite adjudicar el contrato a la oferta que, cumpliendo con los requisitos técnicos mínimos exigidos en los pliegos, presente la mejor relación calidad-precio, lo que facilita seleccionar la oferta más ventajosa y, en consecuencia, garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos.

### **JUSTIFICACION DE NO DISTRIBUIR EN LOTES EL CONTRATO**

La atención sanitaria objeto del contrato, basada en el servicio móvil de atención a drogodependientes de la Comunidad de Madrid en espacios marginales, al que se da continuidad con el tratamiento en las plazas residenciales, constituye una unidad operativa y funcional de una actividad asistencial orientada a conseguir la estabilización del paciente. Su fraccionamiento en lotes impediría obtener la máxima eficiencia y eficacia, necesaria para la ejecución y continuidad del tratamiento.

### **JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

De conformidad con el art 202 es obligatorio establecer al menos una de las condiciones especiales de ejecución referidas a consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, de tipo social o relativas al empleo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado Séptimo del Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, los órganos de contratación deberán incluir, al menos, una condición especial de tipo social, medioambiental o relacionada con la innovación, siempre que esté vinculada al objeto del contrato, no sea discriminatoria y sea proporcionada y compatible con el derecho comunitario.

En cumplimiento de esta normativa, y en la medida en que el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales puedan verse afectados por la ejecución del contrato, los licitadores deberán presentar una declaración responsable donde determinen claramente la línea de actuación dirigida a la implementación de estrategias de gestión medioambiental, tal y como queda detallado en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde indiquen detalladamente la gestión y tratamiento de los residuos vinculados con la prestación del servicio que se oferta y los planes dirigidos a la promoción del reciclado de dichos productos.

### **JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA O PROFESIONAL**

La solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al objeto del contrato, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la

participación de las pequeñas y medianas empresas o de las entidades sin ánimo de lucro que suelen participar en las licitaciones a este tipo de contratos. Por tal motivo, pero teniendo en consideración que con dicha solvencia se debe acreditar la capacidad de la entidad adjudicataria para hacer frente a las prestaciones objeto del contrato, se ha establecido como solvencia económica y financiera suficiente que el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior al importe correspondiente al valor medio anual del presupuesto base de licitación del contrato.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. En el caso que nos ocupa, la solvencia técnica se asocia al presupuesto de ejecución del contrato y se vincula con el objeto del contrato, estableciéndose en el PCAP que se entenderá acreditada, de acuerdo con la actividad a desarrollar objeto del contrato, mediante la experiencia en la gestión y ejecución de actividades de reducción de daños de servicios móviles, públicos o privados, orientadas a minimizar los efectos de la drogodependencia, mejora de la salud de los consumidores y derivación a centros asistenciales de tratamiento de deshabituación de pacientes drogodependientes, por un importe igual o superior al 70% de la anualidad media del presupuesto del contrato.

### **JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION**

Se considera que los criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato cumplen los siguientes requisitos:

- a) Están vinculados al objeto del contrato.
- b) Han sido formulados de manera objetiva, con pleno respecto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad y no confieren al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.
- c) Garantizan que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, al acompañarse de especificaciones que permiten comprobar de manera fehaciente la información facilitada por los licitadores y así evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

La ponderación escogida (49% oferta económica, 31% criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y 20% ) es conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 9/2017, en concreto: “cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las formulas establecidas en los pliegos”.

Los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, no tienen atribuida una ponderación mayor a la correspondiente a los criterios evaluables de forma

automática (20% juicio de valor y 31% valoración automática por aplicación de fórmulas), por ello no procede para su valoración la designación del comité de expertos establecido en el art. 146.2.a) de la LCSP

Se considera que los criterios cualitativos que sirven de base para la adjudicación del contrato garantizan que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, al acompañarse de declaraciones responsables de las entidades licitadoras y del extracto del proyecto técnico de gestión. Esto permite comprobar de manera fehaciente la información facilitada y así evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

Entre los criterios cualitativos se han incluido criterios de adjudicación relativos a los recursos humanos que la entidad adjudicataria se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, tanto en el número de profesionales destinados, como en su grado de especialización técnica y formación, criterios todos ellos vinculados al objeto del contrato y que incide en la calidad del servicio prestado.

El punto 4 del PPT establece la plantilla mínima con que se debe contar para prestar el servicio en las condiciones establecidas. Sin embargo, un incremento del número de profesionales destinados en el centro permitiría un reparto de la carga de trabajo que incidiría directamente en la calidad del servicio prestado, con más tiempo disponible para el ejercicio la labor asistencial por parte de estos profesionales.

También se han incluidos criterios de adjudicación relativos a la docencia, formación e investigación del personal adscrito a la ejecución del contrato. Aspectos como la docencia en las rotaciones del personal en prácticas o la participación en cursos de un plan de formación continuada, inciden en el desarrollo de las carreras de los profesionales implicados, y contribuyen a su consolidación científica y técnica, lo que finalmente repercutirá en la calidad asistencial prestada a los pacientes, lo que está vinculado directamente con el objeto del contrato.

Por otro lado, es importante que la entidad disponga de un plan de formación continuada que ofrezca a los profesionales una formación que les permita la actualización en los diferentes ámbitos relacionados con su campo de intervención, formación que se dirige tanto a la mejora de competencias como al reciclaje de profesionales. El personal de estos CTA son personal externo al Sermas y no tienen opción a la formación continuada de la Comunidad de Madrid, por lo que se considera de gran interés que el equipo de profesionales pueda disponer de un plan de formación alternativo.

En cuanto al criterio que se ha de tomado en consideración para determinar cuándo nos encontramos ante una oferta incurso en presunción de anormalidad, se considerará que se encuentran incursas en presunción de anormalidad las ofertas que sean inferiores al presupuesto base de licitación en más de 20 unidades porcentuales. Sin embargo, dado que en los criterios de adjudicación de las ofertas se incluye la posibilidad de incorporar para la ejecución del contrato recursos humanos no contemplados en el PPT, y que suponen un incremento en

los costes de la entidad adjudicataria para la ejecución del contrato, en las ofertas que obtengan una valoración entre 8 y 15 puntos en los criterios cualitativos evaluables por aplicación de fórmulas referidos a los recursos humanos, se considerará incurso en presunción de anormalidad cuando la oferta económica sea inferior a 15 unidades porcentuales. Si la valoración de estos criterios de adjudicación es superior a 15 puntos, se considerará incurso en presunción de anormalidad cuando la oferta económica sea inferior a 10 unidades porcentuales.

No se han tenido en cuenta los criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor para determinar cuándo nos encontramos ante una oferta incurso en presunción de anormalidad porque estos no suponen un incremento significativo en los costes de la entidad adjudicataria para la ejecución del contrato.

### **JUSTIFICACIÓN DE EXIGENCIA DE UNA GARANTÍA COMPLEMENTARIA**

El art. 107 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que, en casos especiales, el órgano de contratación puede exigir en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, además de la garantía definitiva, el licitador que vaya a ser propuesto como adjudicatario preste una garantía complementaria de hasta un 5 por ciento del precio que haya ofertado, IVA excluido. En este mismo artículo la ley considera que, a estos efectos, constituye un caso especial aquel en el que la oferta presentada por el adjudicatario resultara inicialmente incurso en presunción de anormalidad.

La prestación del servicio consistente en la atención sanitaria de personas adictas a sustancias mediante dispositivos móviles es un instrumento esencial para minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo y para el fomento de las derivaciones de esta población a los recursos de la red asistencial con el propósito de realizar un tratamiento de deshabituación. La interrupción de este servicio podría tener consecuencias muy negativas para los usuarios de este recurso dada la importancia de la atención que se les presta. En este sentido se deben tomar todas las medidas que puedan garantizar su continuidad y buena ejecución, y entre ellas, el art. 107 de la LCSP nos permite establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente de contratación que el licitador que vaya a ser propuesto como adjudicatario preste una garantía complementaria del 5 por ciento del precio de su oferta, IVA excluido, si su oferta resulta inicialmente incurso en presunción de anormalidad, lo que se considera indicado en este caso.

### **JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL**

Durante la ejecución del contrato, no garantizar de forma expresa la reparación de los daños que puedan sufrir las personas o las cosas, de modo muy especial las que constituyan el objeto mismo de la prestación, puede tener consecuencias negativas en la continuidad y seguridad de la asistencia a los pacientes, y por este motivo se entiende que está suficientemente justificada la necesidad de que el



adjudicatario del contrato cuente con un seguro para cubrir la responsabilidad civil sobre los daños causados durante la prestación del servicio en las personas o en los bienes muebles e inmuebles objeto de la actividad contratada.

Las coberturas del seguro de responsabilidad civil que se pretende contratar, y sus límites económicos por siniestro, son los que se exige a los contratos actualmente en vigor, y a los que los nuevos contratos deben dar continuidad. En este sentido se han demostrado que ni son desproporcionados ni limitan la concurrencia de licitadores, ya que han podido ser asumidos por las entidades adjudicatarias. Por otro lado, para determinar el presupuesto base de licitación del nuevo contrato, como se describe en la memoria económica del expediente, se han tenido en cuenta los costes de carácter general que para la ejecución del contrato soportan estas entidades, costes entre los que se encuentra el del seguro de responsabilidad civil requerido.

### **JUSTIFICACIÓN DEL REGIMEN DE INFRACCIONES Y PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA DEL CONTRATO**

En el PCAP se recogen expresamente las penalidades por ejecución defectuosa del contrato de acuerdo con el régimen de infracciones y penalidades que se describe.

Las infracciones que se establecen están relacionadas con incumplimientos de las obligaciones establecidas expresamente en los pliegos del contrato; tanto de obligaciones referidas a las condiciones en que los servicios deben ser prestados para la ejecución del contrato, como de los requisitos de capacitación exigidos al personal que deben realizarlos, o como al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad adjudicataria en sus ofertas que han sido valorados por la Administración como criterios de adjudicación del contrato. A título de ejemplo pueden mencionarse la falta de titulación o manifiesta incapacidad profesional, no acatar las instrucciones dictadas por la dirección del centro, etc.

Existe una relación evidente entre la buena ejecución del servicio y el adecuado tratamiento y diagnósticos de los pacientes de los Centros de Tratamiento de Adicciones, que es el fin último perseguido por el contrato, por lo que un incumplimiento de las obligaciones contractuales que redunde en la calidad de las prestaciones del servicio debe ser objeto del régimen de penalidades propuesto, cuya cuantía se ha establecido de manera proporcional en relación con la gravedad de la infracción.

LA DIRECTORA GENERAL ASISTENCIAL DEL SERMAS

Firmado digitalmente por: ALMUDENA QUINTANA MORGADO  
- [REDACTED]  
Fecha: 2025.03.03 16:33

Fdo.: Almudena Quintana Morgado